

¿LA ECONOMIA CONTRA LA POLITICA?

David Ibarra
17 de mayo de 2005

La cuestión medular de la gobernabilidad en México es la de encontrar salidas a la desigualdad y la pobreza que nos afligen. Puesto en otros términos, dadas las restricciones reales o imaginarias construidas en torno a nuestra transición e inserción en el mundo globalizado, habría que encontrar fórmulas a fin de que el proceso de democratización nacional pudiera atender esa cuestión medular de la normalización de la vida ciudadana.

Durante buena parte de la Guerra Fría y del reinado del keynesianismo, las metas aceptadas por el Occidente fueron las del desarrollo, las de otorgar derechos mínimos para todos, las de la libertad sobre la sujeción, las de la democracia sobre el autoritarismo. Buena parte de ese conjunto de objetivos, ha sido reemplazado por los de la concepción neoliberal sobre la desregulación de mercados, la ampliación de los derechos económicos individuales, la eficiencia, como medios de producir automáticamente desarrollo y equidad distributiva, así como eliminar la corrupción y el mal gobierno. No es que estos últimos valores sean irrelevantes pero, sin duda, no bastan para ordenar armónicamente la vida social, como lo demuestran múltiples experiencias recientes.

En los hechos, se ha dejado que la economía colonice a la política hasta convertirla en ideología que todo lo abarca. Con tal inclinación conservadora, Gilder apunta “elevar los ingresos de los menos diligentes rompe con el nexo entre esfuerzo y recompensa”, esto es, el Estado no puede ayudar a los pobres por cuanto hacerlo militaría en contra de la eficiencia, a pesar del hecho que la

pobreza resulte en alto grado producto del propio sistema económico. En consecuencia, la política, en tanto medio de atender las demandas de la población, queda vacía de contenido, limitada a repetir los dogmas económicos y a sufrir el impacto de la insatisfacción popular. Así se viene intentando construir un sistema normativo rígido que en el fondo justifica la pobreza de muchos con el progreso de unos cuantos.

En la transición del proteccionismo al libre cambio, falsamente se supuso sea la existencia de un armazón institucional apropiado a la libertad de mercados o la adaptación instantánea del mismo a los nuevos cánones económicos. Paralelamente fue habitual hacer crítica acerba de las instituciones anteriores del proteccionismo y del Estado, sin configurar del todo a las que habrían de reemplazarlas con ventaja. En este último sentido, se tacha no sólo de inconveniente, sino de irracional a todo aquello que no se ajusta a las reglas de la nueva economía. Las exageraciones ideológicas abundan: al abolirse el proteccionismo, esto es, cuando más necesidades de apoyo y reconversión tenían los productores nacionales frente a la competencia externa, se afirmó por un alto funcionario público de México que la mejor política industrial era la ausencia de la misma.

También en la visión ideológica dominante suele considerarse a la sociedad civil, como homogénea, ignorando en alto grado las enormes viejas y nuevas diferencias de interés y visión que separan a los diversos grupos sociales. Así se facilita que la política quede subordinada a la economía, empobreciéndose sus funciones básicas de dirimir desacuerdos conforme a reglas convenidas por los partidos políticos o los grupos sociales contendientes. Por eso, pareciera que la nueva ola democratizadora acotada por la nueva economía se extiende en nuestras latitudes a costillas de la política.

Hoy por hoy, la vida ciudadana de México está profundamente escindida: el 60% de la población mexicana económicamente activa carece de acceso a los servicios sociales básicos, el 40%-50% de las familias se debate en la pobreza o el 10% más rico de la población absorbe alrededor del 40% del producto. Es decir, alrededor de la mitad de la población está marginada, no tiene mayor influencia en las decisiones fundamentales de gobierno. Todo eso no basta para romper el supuesto de la homogeneidad social y convencer de la necesidad política de poner remedio a las enormes brechas distributivas. Más aún, se ve con temor a la posible politización de las decisiones socioeconómicas como germen de toda clase de males, singularmente el de un populismo que se combate ideológicamente, pero nunca se precisan sus linderos con una sana política social.

Economía y política se conciben, entonces, como compartimentos formalmente separados pero guardando una relación de subordinación. La primera tiene primacía en ordenar la vida social a partir de criterios como el de crecer hacia fuera, ser eficientes, estabilizar precios, repudiar por dañina toda interferencia gubernamental. Y paralelamente se adopta el dudoso supuesto de que los cambios económicos por profundos que sean, tienen efectos limitados en la vida y estabilidad sociales. Al efecto se pone confianza extrema en que las elecciones limpias y la alternancia de los partidos en el poder, resolverán a cabalidad los conflictos e insatisfacciones sociales que se presenten.

En la práctica, la política queda relegada al intento de limar las tensiones asociadas al funcionamiento irrestricto de los mercados. Pero, esa tarea sólo puede desempeñarse a costos crecientes de legitimidad ya que la inflexibilidad del dogma económico, resta a la política márgenes de maniobra, recursos e instrumentos de acción para atender demandas democráticas legítimas. En

esos términos, el cambio de partido en el Ejecutivo y en la composición de las cámaras legislativas, se vuelve mascarada al permanecer inalteradas las estrategias económicas con olvido del problema candente de la exclusión social. No son los disturbios políticos los que amenazan la estabilidad económica, sino la rigidez de las reglas económicas las que hacen trastabillar al sistema político.

En México, el gobierno y las principales agrupaciones políticas, preocupados por facilitar la transición hacia la globalización, prestan atención privilegiada a los mercados y a los empresarios, sobre todo a los foráneos con descuido de las aspiraciones de las mayorías de la población. Por eso, viene a menos la política como ámbito donde se convienen, establecen, las normas rectoras de la creación y distribución de los ingresos, con peso semejante o mayor al de las señales de los precios de mercado en la determinación de los resultados de la economía y de los equilibrios sociales fundamentales. Y lo tienen por cuanto esas normas determinan en última instancia quienes han de ser pobres y quienes escapan a la exclusión.

Cuando sólo las relaciones entre Estado y empresarios son relevantes, la posibilidad de corregir la marginación social depende de que las élites privada y gubernamental estén dispuestas, convencidas, de la necesidad de comprometer conjuntamente los esfuerzos o sacrificios necesarios. Aquí se tropieza con varios obstáculos. El primero, el presidencialismo hegemónico de antaño hizo innecesario o contraproducente que los empresarios mexicanos asumieran la responsabilidad de cuidar del bienestar y el progreso nacionales, como algo distinto a la consecución de sus intereses particulares. El segundo escollo reside en que parte importante de las élites económicas nacionales, se angosta, pierde poder, como resultado de los procesos de privatización o venta de muchas de las mejores empresas mexicanas públicas y privadas a

inversionistas extranjeros, poco preocupados por los problemas sociales internos. Por último, la abrupta apertura de fronteras y la debacle en el mercado de trabajo, rompen la unidad nacional de objetivos y aspiraciones, complicando las tareas políticas anejas a la formación de acuerdos sociales. Los intereses de los importadores son distintos a los de los exportadores, como también resultan diferentes los de la pequeña y los de la gran industria, los de empresas productivas y los del sector financiero, o entre los negocios nacionales y los negocios en manos extranjeras. De la misma manera, los empleados sindicalizados pretenden objetivos que no se compadecen con los del segmento de trabajadores informales, como distintos son los del personal de las pequeñas empresas con respecto a las de mayor tamaño. La debilidad resultante en las agrupaciones empresariales o sindicales, acentuada por la erosión del mercado de trabajo y del anquilosado corporativismo, ha restado poder a las organizaciones de los trabajadores --antes miembros de la élite-- que, si bien no luchaban directamente en favor de los pobres, si facilitaban la capilaridad social e influían en hacer avanzar algunos derechos sociales.

De su lado, muchos de los principales partidos políticos, manifiestan limitada sensibilidad social, no parecen enfocar sus prelaiones reales a combatir pobreza y exclusión en un sentido integral y por eso se demeritan a los ojos del público. Hay, desde luego, planteamientos constructivos como los relacionados con el programa Progresá (hoy, Oportunidades), el subsidio a los ciudadanos de la tercera edad o el seguro popular. Con todo, poco o nada se hace en términos de definir una activa política de empleo, como meollo vertebrador, insustituible, de la política social. De la misma manera, se habla mucho de la reforma del Estado o en la defensa de los derechos humanos de nuestros emigrados y emigrantes, pero poco se avanza en crear los órganos de mediación política que

den voz a trabajadores y marginados en la definición de las políticas socioeconómicas. Y tampoco hay progreso en institucionalizar derechos sociales exigibles, incorporándolos a los presupuestos gubernamentales como gasto no programable, esto es, con el mismo rango y tratamiento que el pago de los intereses de la deuda pública.

En definitiva, las élites nacionales, mal adaptadas a las exigencias del cambio, pierden liderazgo, capacidad de encauzar la reconstrucción de los pactos sociales básicos. El reflejo de esas debilidades en los partidos políticos se traduce en incapacidad de formar alianzas gobernantes sólidas, incluyentes, efectivas, que pongan fin a una costosa transición socioeconómica que ya se prolonga más de dos décadas. Las energías políticas se desgastan en pactos electorales inestables --violados al poco andar--, en juegos malabares encaminados a combatir o eliminar a los oponentes por la vía de la difamación mediática o la defensa desmedida, tramposa, del Estado de Derecho. Si no se ofrece pan, al menos hay circo político de varias pistas.